CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Área de Trámite y Digitalización de Documentos
03 MAR 2023
RECIBIDO
Firma ____ Hora 2:56

DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 1767/2021-CR y 1761/2021-PE, QUE PROPONEN LA CASTRACIÓN QUÍMICA COMO PENA COMPLEMENTARIA EN LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL PARA FORTALECER SU PREVENCIÓN Y SANCIÓN

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023

Señor Presidente:

Han sido remitidos para estudio y dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos las siguientes propuestas normativas:

Proyecto de Ley	Proponente	Grupo Parlamentario	Denominación de la propuesta normativa
1767/2021-CR	Jhaec Darwin Espinoza Vargas	Acción Popular	Ley que incluye la castración química como pena complementaria en los delitos contra la libertad sexual
1761/2021-PE	Poder Ejecutivo		Ley que modifica el Código Penal para fortalecer la prevención y sanción de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales

Después del análisis y debate correspondiente, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en su Décima Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el 15 de febrero de 2023, acordó por **UNANIMIDAD**, la **NO APROBACIÓN** del presente dictamen.

Con el voto a favor de los congresistas presentes: GONZA CASTILLO Américo, BALCAZAR ZELADA José María, ALVA PRIETO Maria del Carmen, CERRON ROJAS

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CERRON ROJAS Waldemar Jose FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01/03/2023 11:35:48-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: REVILLA VILLANUEVA CESAR MANUEL FIR 44275599 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/03/2023 12:17:04-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ALVA PRIETO Maria Del Carmen FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/02/2023 16:05:54-0500

DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 1767/2021-CR y 1761/2021-PE, QUE PROPONEN LA CASTRACIÓN QUÍMICA COMO PENA COMPLEMENTARIA EN LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL PARA FORTALECER SU PREVENCIÓN Y SANCIÓN

Waldemar José, CHIRINOS VENEGAS Patricia Rosa, CHAVEZ CHINO Betssy Betzabet, CRUZ MAMANI Flavio, DOROTEO CARBAJO Raúl Felipe, ECHAIZ DE NUÑEZ IZAGA Gladys Margot, JUAREZ GALLEGOS Carmen Patricia, LUQUE IBARRA Ruth, MORANTE FIGARI Jorge Alberto, MUÑANTE BARRIOS Alejandro, SALHUANA CAVIDES Eduardo, TUDELA GUTIERREZ Adriana Josefina, VENTURA ANGEL Héctor José y REVILLA VILLANUEVA Cesar Manuel[1].

Con ningún voto en contra y ningún voto en abstención.

I. SITUACIÓN PROCESAL

1.1 Antecedentes procedimentales

Los Proyectos de Ley 1767/2021-CR y 1761/2021-PE fueron presentados y decretados a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, conforme se aprecia en el siguiente cuadro:

Proyecto de Ley	Fecha de presentación	Fecha de decreto e ingreso a la Comisión	Comisión
1767/2021-CR	21/04/2022	26/04/2022	Justicia y Derechos Humanos
1761/2021-PE	21/04/2022	26/04/2022	Justicia y Derechos Humanos

Las propuestas normativas materia del presente dictamen cumplen con los requisitos generales y específicos señalados en los artículos 75, 76 y 77 del Reglamento del Congreso de la República, por lo que se realizó el estudio correspondiente.

1.2 Opiniones técnicas solicitadas

Para la elaboración del presente dictamen, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, ha solicitado opinión de las siguientes entidades:

[1] *Congresista accesitario en reemplazo del Congresista MOYANO DELGADO Martha Lupe.*

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: VENTURA ANGEL Hector Jose FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/03/2023 12:41:07-0500

Proyecto de Ley	Oficio	Institución	Fecha
1767/2021-CR	940-2021-2022-CJYDDHH/CR	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	12/05/2022
	941-2021-2022-CJYDDHH/CR	Ministerio de Salud	12/05/2022
	942-2021-2022-CJYDDHH/CR	Poder Judicial	12/05/2022
	943-2021-2022-CJYDDHH/CR	Ministerio Público	12/05/2022
	944-2021-2022-CJYDDHH/CR	Defensoría del Pueblo	12/05/2022

Proyecto de Ley	Oficio	Institución	Fecha
1761/2021-PE	926-2021-2022-CJYDDHH/CR	Ministerio de Salud	11/05/2022
	927-2021-2022-CJYDDHH/CR	Ministerio del Interior	11/05/2022
	928-2021-2022-CJYDDHH/CR	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	11/05/2022
	929-2021-2022-CJYDDHH/CR	Poder Judicial	11/05/2022
	930-2021-2022-CJYDDHH/CR	Ministerio Público	11/05/2022

II. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

El Proyecto de Ley 1767/2021-CR tiene por objeto incluir la castración química como pena complementaria en los delitos contra la libertad sexual, con ese propósito se plantea la modificación de los artículos 28, 170, 171, 172, 173 y 174 del Decreto Legislativo 635, Código Penal. Así, se tiene:

Texto actual del Código Penal	Fórmula normativa propuesta
"Artículo 28.- Las penas aplicables de conformidad con este Código son:	**"Artículo 28.- Las penas aplicables de conformidad con este Código son:**

- Privativa de libertad; - Restrictivas de libertad; - Limitativas de derechos; y, - Multa".	- Privativa de libertad; - Restrictivas de libertad; - Limitativas de derechos; - **Tratamientos Médicos Obligatorios; y** - Multa".
"Artículo 170.- Violación sexual El que, con violencia, física o psicológica, grave amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento, obliga a esta a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de catorce ni mayor de veinte años. La pena privativa de libertad será no menor de veinte ni mayor de veintiséis años, en cualquiera de los casos siguientes: 1. Si la violación se realiza con el empleo de arma o por dos o más sujetos. 2. Si el agente abusa de su profesión, ciencia u oficio o se aprovecha de cualquier posición, cargo o responsabilidad legal que le confiera el deber de vigilancia, custodia o particular autoridad sobre la víctima o la impulsa a depositar su confianza en él.	**"Artículo 170.- Violación sexual** El que, con violencia, física o psicológica, grave amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento, obliga a esta a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de catorce ni mayor de veinte años **y con la administración de tratamiento médico de castración química durante el cumplimiento de toda la pena privativa de libertad establecida**. La pena privativa de libertad será no menor de veinte ni mayor de veintiséis años **y con la administración de tratamiento médico de castración química durante el cumplimiento de toda la pena privativa de libertad establecida**, en cualquiera de los casos siguientes: 1. Si la violación se realiza con el empleo de arma o por dos o más sujetos. 2. Si el agente abusa de su profesión, ciencia u oficio o se aprovecha de cualquier posición, cargo o responsabilidad legal que

3. Si el agente aprovecha su calidad de ascendiente o descendiente, por consanguinidad, adopción o afinidad; o de cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente o con la víctima esté sosteniendo o haya sostenido una relación análoga; o tiene hijos en común con la víctima; o habita en el mismo hogar de la víctima siempre que no medien relaciones contractuales o laborales; o es pariente colateral hasta el cuarto grado, por consanguinidad o adopción o segundo grado de afinidad. 4. Si es cometido por pastor, sacerdote o líder de una organización religiosa o espiritual que tenga particular ascendencia sobre la víctima. 5. Si el agente tiene cargo directivo, es docente, auxiliar o personal administrativo en el centro educativo donde estudia la víctima. 6. Si mantiene una relación proveniente de un contrato de locación de servicios, o de una relación laboral con la víctima, o si esta le presta servicios como trabajador del hogar. 7. Si fuera cometido por personal perteneciente a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Serenazgo, Policía Municipal o vigilancia privada, o cualquier funcionario o servidor público,	le confiera el deber de vigilancia, custodia o particular autoridad sobre la víctima o la impulsa a depositar su confianza en él. 3. Si el agente aprovecha su calidad de ascendiente o descendiente, por consanguinidad, adopción o afinidad; o de cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente o con la víctima esté sosteniendo o haya sostenido una relación análoga; o tiene hijos en común con la víctima; o habita en el mismo hogar de la víctima siempre que no medien relaciones contractuales o laborales; o es pariente colateral hasta el cuarto grado, por consanguinidad o adopción o segundo grado de afinidad. 4. Si es cometido por pastor, sacerdote o líder de una organización religiosa o espiritual que tenga particular ascendencia sobre la víctima. 5. Si el agente tiene cargo directivo, es docente, auxiliar o personal administrativo en el centro educativo donde estudia la víctima. 6. Si mantiene una relación proveniente de un contrato de locación de servicios, o de una relación laboral con la víctima, o si esta le presta servicios como trabajador del hogar. 7. Si fuera cometido por personal perteneciente a las Fuerzas Armadas,

valiéndose del ejercicio de sus funciones o como consecuencia de ellas. 8. Si el agente tiene conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave. 9. Si el agente, a sabiendas, comete la violación sexual en presencia de cualquier niña, niño o adolescente. 10. Si la víctima se encuentra en estado de gestación. 11. Si la víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad, es adulto mayor o sufre de discapacidad, física o sensorial, y el agente se aprovecha de dicha condición. 12. Si la víctima es mujer y es agraviada por su condición de tal en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B. 13. Si el agente actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas que pudiera alterar su conciencia".	Policía Nacional del Perú, Serenazgo, Policía Municipal o vigilancia privada, o cualquier funcionario o servidor público, valiéndose del ejercicio de sus funciones o como consecuencia de ellas. 8. Si el agente tiene conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave. 9. Si el agente, a sabiendas, comete la violación sexual en presencia de cualquier niña, niño o adolescente. 10. Si la víctima se encuentra en estado de gestación. 11. Si la víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad, es adulto mayor o sufre de discapacidad, física o sensorial, y el agente se aprovecha de dicha condición. 12. Si la víctima es mujer y es agraviada por su condición de tal en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B. 13. Si el agente actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas que pudiera alterar su conciencia".

"Artículo 171.- Violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir El que tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal, anal o bucal, o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, después de haberla puesto en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de veintiséis años".	**"Artículo 171.- Violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir** El que tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal, anal o bucal, o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, después de haberla puesto en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de veintiséis años, y **con la administración de tratamiento médico de castración química durante el cumplimiento de toda la pena privativa de la libertad establecida".**
"Artículo 172.- Violación de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento El que tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, conociendo que está impedida de dar su libre consentimiento por sufrir de anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, retardo mental o que se encuentra en incapacidad de resistir, será	**"Artículo 172.- Violación de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento** El que tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, conociendo que está impedida de dar su libre consentimiento por sufrir de anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, retardo mental o que se encuentra en incapacidad de resistir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de veintiséis años, **y con la administración de tratamiento médico de**

reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de veintiséis años".	**castración química durante el cumplimiento de toda la pena privativa de libertad establecida".**
"Artículo 173.- Violación sexual de menor de edad El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de catorce años, será reprimido con pena de cadena perpetua".	**"Artículo 173.- Violación sexual de menor de edad** El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de catorce años, será reprimido con pena de cadena perpetua, y **con la administración de tratamiento médico de castración química durante el cumplimiento de toda la pena privativa de libertad establecida".**
"Artículo 174.- Violación de persona bajo autoridad o vigilancia El que, aprovechando la situación de dependencia, autoridad o vigilancia tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o introduce objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías a una persona colocada en un hospital, asilo u otro establecimiento similar o que se halle detenida o recluida o interna, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de veintiséis años".	**"Artículo 174.- Violación de persona bajo autoridad o vigilancia** El que, aprovechando la situación de dependencia, autoridad o vigilancia tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o introduce objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías a una persona colocada en un hospital, asilo u otro establecimiento similar o que se halle detenida o recluida o interna, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de veintiséis años, **y con la administración de tratamiento médico de castración química durante el cumplimiento de toda la pena privativa de libertad establecida".**

Finalmente, se plantea tres (3) disposiciones complementarias finales referidas a su cumplimiento y reglamentación, la vigencia de la ley; y, la derogación de todas las disposiciones que contravengan las modificaciones propuestas.

El Proyecto de Ley 1761/2021-PE propone modificar los artículos 170, 171, 172, 174, 175 y 368 del Decreto Legislativo 635, Código Penal. En ese sentido, plantea la inclusión del párrafo siguiente en la redacción de los artículos referidos a violación sexual, violación de persona en estado de inconciencia o en la imposibilidad de resistir, violación de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento, violación de persona bajo autoridad o vigilancia, y violación sexual mediante engaño, esto es, en la modificación de los artículos 170, 171, 172, 174 y 175, respectivamente:

> *"El juez o la jueza impone como pena accesoria el tratamiento médico especializado para la reducción de la libido sexual del/la condenado/a, el cual será ejecutado una vez cumplida la pena privativa de libertad. El juez o jueza solicitará anualmente el informe de la junta médica correspondiente, el cual contendrá la evaluación física y mental del/la condenado/a, con la finalidad de que el órgano jurisdiccional evalúe la continuidad de su ejecución".*

Del mismo modo, propone la inclusión de la siguiente redacción en el artículo 368, referido a la resistencia o desobediencia a la autoridad:

> *"Cuando se desobedece o resiste a la pena accesoria prevista en los artículos 170, 171, 172, 174 y 175 será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años".*

Finalmente, la Disposición Complementaria Final de la Propuesta de Ley establece que, de forma conjunta, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Salud; y, el Ministerio de Economía y Finanzas, reglamentará la presente Ley en el plazo de noventa (90) días, contado a partir de su

entrada en vigor.

III. MARCO NORMATIVO

3.1 De carácter universal

- Convención Americana sobre Derechos Humanos
- Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
- Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura
- Ley 26842, Ley General de Salud y sus modificatorias
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

3.2 De carácter nacional

- Constitución Política del Perú de 1993
- Decreto Legislativo 635, Código Penal
- Decreto Legislativo 957, Nuevo Código Procesal Penal
- Decreto Supremo N° 003-2021-JUS, Texto Único Ordenado del Código de Ejecución Penal
- Ley 30838, Ley que modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal para fortalecer la prevención y sanción de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual
- Ley 31307, Ley que promulga el Código Procesal Constitucional

IV. OPINIONES TÉCNICAS RECIBIDAS

a) El **Proyecto de Ley 1767/2021-CR,** ha recibido las siguientes opiniones:

1) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Mediante el Oficio N° 2834-2022-JUS/SG de fecha 24 de octubre de 2022, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, remite el Informe Técnico N° 174-2022-JUS/DGAC, elaborado por la Dirección General de Asuntos Criminológicos, el cual concluye que el Proyecto de Ley 1767/2021-CR, **resulta viable con las siguientes observaciones**:

- La propuesta normativa se sustenta en un fin disuasorio de la pena al asumir que con la pena complementaria de castración química, se reducirían los índices de comisión de los delitos que se pretende modificar.
- Bajo ese marco, en la exposición de motivos, no se evidencia información científica que permita afirmar que la imposición de la pena de castración química, reduzca las altas tasas de criminalidad sexual, puesto que, si bien se señala la legislación comparada en las cuales se ha implementado esta medida, no se advierte que se haya complementado la misma con los resultados que ha producido en dichos países, por lo que, se recomienda incorporar información científica que permita prever la futura reducción de los índices de criminalidad sexual con la incorporación de esta pena.
- Por otro lado, se recomienda replantear el extremo de la ejecución de la pena de castración química, pues se advierte incoherencia sustancial en la aplicación de la pena propuesta, al plantearse que sea impuesta al condenado durante el cumplimiento de toda la pena privativa de libertad establecida, la misma que será ejecutada en un centro penitenciario; sin embargo, para fines reales, la pena no cumpliría su función protectora si los efectos de los químicos medicados destinados a reducir la libido y la actividad sexual no continúan al egresar del establecimiento penitenciario, lo que no impediría que los delincuentes sexuales reincidan.

- Finalmente, y con relación a la técnica normativa, se recomienda señalar de modo expreso, las normas que se derogarán, ello de conformidad a lo dispuesto en el inciso 30.1 del artículo 30 del Reglamento de la Ley Marco de Producción y Sistematización Legislativa. Asimismo, dicha disposición, corresponde ser estructurada dentro de una Única Disposición Complementaria Derogatoria.

2) Ministerio Público

Mediante el Oficio N° 002831-2022-MP-FN-SEGFIN de fecha 15 de junio de 2022, el Ministerio Público, remite el Informe N° 000031-2022-MP-FN-CN-FEVCMYGF/LMV, elaborado por la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, el cual concluye que el Proyecto de Ley 1767/2021-CR, **resulta no viable por las siguientes consideraciones:**

- La propuesta normativa no concuerda con lo estipulado en la Convención

Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Constitución Política del Perú; y, lo señalado en el Texto Único Ordenado del Código de Ejecución Penal.

- Bajo ese marco, corresponde señalar que, en la actualidad, la castración química se ha desarrollado con el propósito de utilizarla como método de prevención contra los abusos sexuales y como castigo para aquellas personas que han cometido crímenes de esta índole. Así, en muchos países se está considerando la aplicación de este procedimiento para aquellos individuos que, al ser encontrados culpables, lo requieran voluntariamente; sin embargo, los resultados no han sido los esperados, puesto que, en muchos casos, la reducción y control de la libido no ha resultado[2].
- Aunado a ello, cabe precisar que, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostuvo que la castración química como forma de castigo, viola la prohibición absoluta de tortura y penas crueles, inhumanas y degradantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
- En la misma línea, se debe señalar que, la castración química es un procedimiento reversible que se caracteriza por la manipulación de hormonas. Se trata de una forma de esterilización que actúa inhibiendo la libido y, consecuentemente, la práctica de relaciones sexuales. Importante destacar que, tal procedimiento puede producir efectos colaterales relevantes, los cuales deben ser tomados en consideración en el momento de la decisión cuanto a su eventual adopción[3].
- En ese sentido, la castración química equivaldría a una pena corporal, y las penas corporales están prohibidas en nuestro país; y como pena complementaria viola el derecho fundamental de dignidad de la persona y el principio constitucional de rehabilitación y reinserción social del reo.
- Además, no existe certeza de la eficacia de la castración química para lograr disminuir la libido sexual del condenado y debe tenerse en consideración que en la violación sexual no necesariamente se utiliza el miembro viril, lo que no implica que

---

[2] Información recuperada el 12 de enero de 2023, de http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/viewFile/914//1083

[3] Fleury, Eliane 2014. "Castración química en los casos de pedofilia: consideraciones bioéticas". Revista Bioética, Universidad de Brasilia http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/viewFile/914/1083

no pueda cometerse utilizando otros medios.

- Por lo expuesto, la implementación de la castración química como pena complementaria no evitaría la reincidencia en casos de violación sexual, siendo una medida muy onerosa de ejecutar, además que su ejecución implicaría que el Estado peruano incumpla con las obligaciones estipuladas en los tratados internacionales que forma parte, siendo lo más recomendable que se adopten medidas que aborden las causas de la violencia sexual dirigida hacia las mujeres, a través de la sensibilización y educación de las niñas, niños y adolescentes y la sociedad en su conjunto, abordando temáticas de igualdad de género, educación sexual integral, no discriminación y derechos de las personas menores de edad.

3) Defensoría del Pueblo

Mediante el Oficio N° 385-2022-DP/PAD de fecha 22 de junio de 2022, la Defensoría del Pueblo remite el Informe Jurídico N° 007-2022-DP/ADM, el cual concluye que el Proyecto de Ley 1767/2021-CR **resulta no viable, por las siguientes consideraciones:**

- La medida de castración química como pena complementaria en los delitos contra la libertad sexual no tiene como objetivo la reinserción social, sino la incapacitación de la persona sentenciada y, por ende, rebasa los límites de los fines de la pena en el marco de los derechos humanos, tutelados por la Constitución. El derecho fundamental que se ve afectado por sanciones de esta naturaleza es la dignidad de la persona.
- En esa línea, la aplicación del tratamiento médico de castración química no tiene un impacto positivo en prevenir los delitos contra la libertad sexual, e implica una vulneración de la entidad corpórea de la persona sujeta a sentencia por este tipo de delitos, lo que genera una afectación, además, a su derecho a la integridad.
- En resumen, la propuesta legislativa tiene como objeto establecer el tratamiento médico de castración química como una sanción obligatoria de ser aplicada de manera conjunta con la pena privativa de la libertad en los delitos vinculados a la libertad e indemnidad sexual. Esta medida atenta contra la dignidad e integridad de las personas a quienes pretende ser aplicada y no genera ningún impacto en la prevención de los delitos relacionados a la violencia sexual.

b) El **Proyecto de Ley 1761/2021-PE,** ha recibido las siguientes opiniones:

1) Ministerio de Salud

Mediante el Oficio N° D002206-2022-SG-MINSA de fecha 21 de diciembre de 2022, el Ministerio de Salud remite el Informe N° D000437-2022-OGAJ/MINSA, el cual concluye que el Proyecto de Ley 1761/2021-PE **resulta no viable, por las siguientes consideraciones:**

- En la exposición de motivos de la propuesta de ley se precisa que la dañosidad de los delitos contra la libertad sexual y su peso en la sociedad peruana es intensa. Frente a ello, la respuesta punitiva del Estado no puede limitarse al cumplimiento de penas privativas de libertad, ya que no necesariamente evitan la reincidencia de estos graves delitos, es por ello que se justifica la implementación de medidas punitivas que permitan impedir la violación sexual que se realiza mediante penetración fálica.
- Por otro lado, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley 31307, Ley que promulga el Código Procesal Constitucional, con relación a la interpretación de los derechos humanos y tratados internacionales, prescribe que *"El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como con las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte. En caso de incompatibilidad entre una norma convencional y una constitucional, los jueces preferirán la norma que más favorezca a la persona y sus derechos humanos".*
- En la misma línea, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual el Perú es Estado Parte, en su artículo 5, referido al Derecho a la Integridad Personal, establece que *"1) Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica o moral, 2) Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, 3) La pena no puede trascender a la persona del delincuente, 4) Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas, 5) Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante los tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento, 6) Las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados".*

- Bajo ese marco, el Perú se encuentra comprometido expresamente a conformar sus leyes a las normas internacionales sobre derechos humanos. Así, la castración química es inconstitucional y vulnera derechos fundamentales, al estar considerado como forma de castigo que viola la prohibición absoluta de tortura, penas crueles, inhumanas y degradantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- De otro lado, la castración química es un tratamiento hormonal que pretende frenar el deseo sexual, para lograrlo se le suministran sustancias al individuo que impiden la segregación de testosterona, hormona encargada de la actividad sexual, estos medicamentos actúan a través de la glándula hipófisis bloqueando su producción, si bien el resultado es el descenso del impulso sexual, también trae como consecuencia cambios metabólicos, fatiga, problemas gastrointestinales, cardiovasculares, pérdida ósea, dolores de cabeza, así como el incremento de la depresión, inestabilidad en el estado de ánimo, entre otros.
- Con relación a lo anterior, cabe precisar que, en el Perú no existe autorización para el uso de los medicamentos anti estrógenos para el tratamiento de la castración química, lo que implica que necesariamente debe gestionarse un procedimiento administrativo interno para poder ingresar los medicamentos idóneos al sistema de salud, para lo cual se debe considerar sus indicaciones, contraindicaciones y potenciales efectos secundarios de riesgo, conjuntamente con una política de salud mental para los que recibirían dicho tratamiento.
- Finalmente, y por todo lo expuesto, el Proyecto de Ley 1761/2021-PE no ha contemplado las normas internacionales y constitucionales referentes a la protección de los Derechos Humanos.

2) Ministerio Público

Mediante el Oficio N° 002798-2022-MP-FN-SEGFIN de fecha 14 de junio de 2022, el Ministerio Público, remite el Informe N° 000027-2022-MP-FN-CN-FEVCMYGF/LMV, elaborado por la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, el cual concluye que el Proyecto de Ley 1761/2021-PE, **resulta no viable por las siguientes consideraciones:**

- La propuesta normativa no concuerda con lo estipulado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Constitución Política del Perú; y, lo señalado en el

Texto Único Ordenado del Código de Ejecución Penal.

- En esa línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que la castración química como forma de castigo, viola la prohibición absoluta de tortura y penas crueles, inhumanas y degradantes, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, por lo que su aplicación contravendría los Tratados Internacionales a los que el Estado peruano se encuentra inscrito.
- A modo de ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 7 refiere que "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos".
- Asimismo, en los artículos II y III del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código de Ejecución Penal, se señala que "La ejecución penal tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. La ejecución penal y las medidas privativas de libertad de los procesados están exentas de tortura o trato inhumano o humillante y de cualquier otro acto o procedimiento que atente contra la dignidad del interno".
- Bajo ese contexto, fortalecer la prevención y sanción de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, requiere de medidas que aborden las causas de la violencia sexual, a través de la sensibilización y educación de las personas menores de edad y la sociedad en su conjunto con temáticas de igualdad de género, educación sexual integral, no discriminación y derechos de las niñas, niños y adolescentes.

3) Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Mediante el Oficio N° D001864-2022-MIMP-SG de fecha 12 de setiembre de 2022, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables remite el Informe N° D000061-2022-MIMP-DATPS-JAR, el cual concluye que el Proyecto de Ley 1761/2021-PE **resulta no viable, por las siguientes consideraciones:**

- El principal problema de la medida propuesta con la iniciativa de ley es que se asume que los motivos de la violación sexual contra niñas, niños y adolescentes se relaciona exclusivamente con un factor biológico. Esto desconoce el modelo conceptual o ecológico de la violencia reconocido en instrumentos de gestión del Estado peruano, tales como el Programa Presupuestal orientado al Resultado de Reducción de la Violencia contra la Mujer y la Estrategia Nacional de Prevención

de la Violencia contra las Mujeres "Mujeres libres de violencia", que establecen intervenciones integrales, articuladas y efectivas para prevenir la violencia contra las mujeres, entre ella la violencia sexual, en todos los espacios de socialización y convivencia aplicables en todas las entidades públicas, así como las entidades privadas y la sociedad civil en general.

- Aunado a ello, la castración química constituye una medida costosa, sin comprobada eficacia en la prevención de los delitos contra la libertad sexual, ya que no existe evidencia sólida de la relación entre la castración química y la disminución de la reincidencia de los sentenciados por violación sexual; y principalmente, invisibiliza el principal problema de la violencia sexual en el país, el mismo que se encuentra vinculado con la existencia de relaciones de poder desiguales y la discriminación estructural contra las mujeres en su diversidad.
- En esa línea, el recurso presupuestario que implicaría para el Estado peruano implementar la castración química involuntaria como medida de prevención frente a los delitos de violencia sexual, debería ser invertida en aquellas intervenciones que cuentan con evidencia científica y están vinculadas a atacar las causas del problema o implementar aquellas normativas vigentes que tienen como objeto establecer mecanismos de prevención frente a la violencia sexual.
- Por otro lado, el proyecto de ley no contribuye con la finalidad del régimen penitenciario, que tiene como objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad, pues la propuesta normativa parte de la afirmación que la persona no puede ser rehabilitada y que se deben adoptar medidas para impedir la reincidencia.
- Por lo expuesto, la castración química no es una medida idónea para prevenir la violencia sexual en el Perú y no contribuye a la erradicación de la violencia de género, todo lo contrario, invisibiliza las principales causas del problema vinculadas a la construcción de las relaciones desiguales de género, y, por ende, a las intervenciones que tienen como objetivo atacar dichos factores.

V. ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS LEGISLATIVAS

Análisis técnico legal

A lo largo de la historia, para resolver sus conflictos, el ser humano ha implementado diversas formas. Así, en 1789, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se produjo el avance más importante, pasar del castigo de los cuerpos al

encierro. A partir de ello, la dignidad humana se constituye en el eje central y los principios básicos de protección a la persona se constitucionalizan: legalidad, integridad, proporcionalidad, entre otros.

En la actualidad, con la Declaración Universal de Derechos Humanos (1949), las democracias consolidaron su ejercicio del castigo sobre el reconocimiento de los derechos humanos, prestando especial atención a la Convención Americana de Derechos Humanos y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A manera de ejemplo, la Corte IDH ha fijado criterios para determinar la viabilidad de los castigos, señalando a la intencionalidad, la severidad del sufrimiento y la finalidad perseguida como parámetros que son tomados en consideración por los Estados. Así, en el caso *Ceasar vs. Trinidad y Tobago* (2005), señaló "El Estado parte de la Convención Americana tiene la obligación erga omnes de abstenerse de imponer penas corporales, así como prevenir su imposición, por constituir, en cualquier circunstancia, un trato o pena cruel, inhumana o degradante".

En esa línea, en los últimos años, se ha promovido la justicia restaurativa como mecanismo para la implementación de la aplicación de salidas alternativas al conflicto. Al respecto, resulta pertinente analizar si la castración química responde a principios constitucionales y se encuentra en el marco de las normas supraconstitucionales y de derechos humanos.

Bajo ese contexto, resulta oportuno mencionar que, de acuerdo con la exposición de motivos del **Proyecto de Ley 1767/2021-CR**, el objeto de la reforma planteada respondería a la alta incidencia de los delitos contra la libertad sexual. Sobre el particular, se afirma que la castración química, entendida como *"la administración de medicamentos destinados a bloquear la producción de la testosterona en los testículos, lo que produce una disminución del impulso sexual o libido en el hombre. El medicamento se denomina acetato de medroxiprogesterona que es un progestágeno, es decir una sustancia que favorece el desarrollo de la progesterona, hormona que aporta las características femeninas a una persona y disminuye la testosterona, que es la hormona que aporta los elementos de masculinidad"*[4], podría constituirse en una medida disuasiva ante futuras comisiones de este tipo de delitos.

[4] UGAZ SANCHEZ MORENO, José C. Artículo "La Castración Química. Pena o medida de seguridad. En Revista Derecho y Sociedad N° 13.

No obstante ello, se debe tener en cuenta que, no existe evidencia sólida que permita afirmar que la imposición de la pena de castración química permita prevenir el delito o reducir las altas tasas de criminalidad.

Al respecto, es importante señalar que, las Naciones Unidas[5] en su Informe de la Relatora Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, refiere que *"Los estudios sobre la eficacia de los diferentes programas de tratamiento para reducir las tasas de reincidencia de los delincuentes sexuales no ofrecen resultados concluyentes. Por consiguiente, se necesitan más investigaciones exhaustivas y basadas en datos empíricos, (...)"*.

También, cabe mencionar que, el artículo 16 de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, refiere que *"1. Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (...)"*.

Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 7, refiere que *"Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos"*.

Aunado a lo anterior, en los artículos II y III del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código de Ejecución Penal, se señala *"La ejecución Penal tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado en la sociedad. La ejecución penal y las medidas privativas de libertad de los procesados están exentas de tortura o trato inhumano o humillante y de cualquier otro acto o procedimiento que atente contra la dignidad del interno"*.

En esa línea, la castración química equivaldría a una pena corporal, y las penas corporales están prohibidas en el Perú. Asimismo, como pena complementaria, concordamos con lo señalado en la respuesta de opinión del Ministerio Público, esto es, viola el derecho fundamental de dignidad de la persona y el principio constitucional de rehabilitación y reinserción social del reo, puesto que su objetivo resultaría ser la incapacitación de la

[5] https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/201610363.pdf Consultado el 16 de enero de 2023.

persona sentenciada, situación que rebasa los límites de los fines de la pena en el marco de los derechos humanos, tutelados por la Constitución Política.

Sobre el particular, el propio Tribunal Constitucional se ha pronunciado, sosteniendo que *"En ningún caso puede ser permitido desconocer la personalidad del individuo, y por ende, su dignidad. Ni aún cuando el sujeto se encuentre justificadamente privado de su libertad es posible dejar de reconocerle una serie de derechos o atribuciones que por su sola condición de ser humano le son consustanciales. La dignidad, así, constituye un mínimo inalienable que todo ordenamiento debe respetar, defender y promover*[6].
Por otro lado, es importante señalar que, en su exposición de motivos, la propuesta legislativa señala la legislación comparada en las cuales se ha implementado esta medida; sin embargo, la misma no se ha complementado con los resultados en relación a la disminución de la incidencia de los delitos contra la libertad sexual que han producido en dichos países, por lo que coincidimos con lo señalado en la respuesta de opinión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, esto es, que no es posible prever si la medida tendría justificación político-criminal.

Asimismo, la medida no cumpliría su función protectora, puesto que, plantea ser impuesta al condenado durante el cumplimiento de toda la pena privativa de libertad establecida, la misma que es ejecutada en un centro penitenciario; no obstante, si los efectos de los químicos medicados no continúan al egresar del establecimiento penitenciario, no impediría la reincidencia como es el propósito del proyecto de ley.

Con relación al **Proyecto de Ley 1761/2021-PE**, cabe destacar que, en su exposición de motivos se señala que, su objetivo es la inclusión de la castración química como pena accesoria ante la comisión de delitos contra la libertad sexual. Al respecto, es importante precisar que, si bien su planteamiento se constituye en modificar el Código Penal para fortalecer la prevención y sanción de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales a través de la aplicación de la castración química, las Naciones Unidas a través de su Informe de la Relatora Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, sostienen que:

---

[6] Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 0010-2002-AI, de fecha 03 de enero de 2013. Fj. 214.

- Es necesario estudios exhaustivos sobre la eficacia de la aplicación de esta medida, los cuales deben estar basados en datos empíricos.
- La Castración química como forma de castigo, viola la prohibición absoluta de tortura y penas crueles, inhumanas y degradantes.

Aunado a ello, y dentro del marco jurídico nacional, en los artículos II y III del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código de Ejecución Penal, se señala de forma taxativa que "(...) La ejecución penal y las medidas privativas de libertad de los procesados están exentas de tortura o trato inhumano o humillante y de cualquier otro acto o procedimiento que atente contra la dignidad del interno".

También, corresponde hacer mención al Informe N° 004-2022-JDAG-DSARE-DGIESP/MINSA de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, citado en la respuesta de opinión del Ministerio de Salud, el cual sostiene lo siguiente:

- "(...) Los medicamentos usados para la castración química son anti andrógenos, actúan descomponiendo y eliminando la testosterona e inhibiendo la producción de hormona luteinizante a través de la glándula pituitaria, que a su vez inhibe o previene la producción de testosterona. Debido a que la testosterona se asocia con la excitación sexual, el uso de estos agentes hace que esto se reduzca, consiguientemente la motivación para la ofensa sexual en individuos dispuestos a tales comportamientos, pero faltan estudios de control bien diseñados e investigación más rigurosa en el área.
- Los productos farmacéuticos utilizados para la reducción de la libido sexual tienen efectos secundarios adversos como la disminución y pérdida de vello facial y corporal, redistribución de grasa en el cuerpo, cambios metabólicos, fatigas, problemas gastrointestinales, problemas cardiovasculares, pérdida prematura ósea y dolores de cabeza. Asimismo, efectos sistémicos como el aumento de depresión y la inestabilidad del estado de ánimo, por lo que este tratamiento es poco aceptado, aunado a ello, los especialistas sostienen que por sí solo, no es efectivo. (...)".

Cabe agregar que, como lo refiere el Ministerio de Salud en su respuesta de opinión, en el Perú, "no existe autorización para el uso de los medicamentos anti estrógenos para el tratamiento de la castración química, lo que implica que necesariamente debe gestionarse un procedimiento administrativo interno para poder ingresar los medicamentos idóneos al sistema de salud, en la que se considere sus indicaciones, contraindicaciones y potenciales

efectos secundarios de riesgo, conjuntamente con una política de salud mental para los que recibirían dicho tratamiento".

Por tanto, fortalecer la prevención y sanción de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales requiere de otro tipo de medidas que aborden diversas temáticas sobre niñas, niños, adolescentes y de la sociedad en su conjunto.

Por otro lado, corresponde resaltar que, el Perú forma parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes desde 1988, así como su Protocolo Facultativo desde el 2006. Asimismo, resulta pertinente señalar que, la Carta de las Naciones Unidas respecto a la igualdad de derechos, determina que la dignidad es inherente a toda persona, por lo que los Estados deben promover su respeto y observarse en los Derechos Humanos. En esa línea, debe tenerse en consideración la posición como Estado, en base a lo regulado en el Código Penal y el artículo 55 de la Constitución Política del Perú, el cual señala que, los tratados celebrados por el Estado y en vigor, forman parte del derecho nacional.

Por lo expuesto líneas más arriba, la implementación de la castración química involuntaria como pena complementaria, no evitaría la reincidencia en casos de violación sexual, siendo un tratamiento de tiempo prolongado y muy onerosa de ejecutar, es decir, su implementación demandaría un alto presupuesto público. Además, implicaría que el Estado peruano incumpla con las obligaciones estipuladas en los tratados internacionales que forma parte, siendo más recomendable que se adopten las medidas con evidencia científica vinculadas a atacar las causas del problema.

Por todo lo anterior, consideramos importante resaltar que, siguiendo el raciocinio común de la Doctrina Penal, la castración química no califica como una pena, puesto que, no cumple los fines de la misma (artículo 139, numeral 22 de la Constitución Política), por lo que, se trataría de una desviación que abusa de los derechos del sentenciado. Por tanto, no puede ser clasificada como pena complementaria o limitativa de derechos como lo plantean los proyectos de ley analizados.

Aunado a ello, es importante precisar que, si bien ambos proyectos tienen similitudes, su diferencia radica en que la iniciativa legislativa 1767/2021-CR plantea que la medida se ejecute durante el cumplimiento de la pena privativa de libertad, mientras que la propuesta del Poder Ejecutivo formula su ejecución una vez cumplida la pena privativa de libertad.

Bajo ese contexto y por lo anteriormente expuesto, consideramos que al no existir evidencia sólida de la relación entre la castración química y la disminución de la reincidencia de los sentenciados por violación sexual, en concordancia con lo señalado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en su respuesta de opinión, la aplicación de esta medida invisibiliza el principal problema de la violencia sexual en el país, esto es, la existencia de relaciones de poder desiguales y la discriminación estructural contra las mujeres en su diversidad, y por ende, debilita y contradice a las intervenciones que tienen como objetivo atacar dichos factores.

Finalmente, corresponde señalar que, las propuestas normativas objeto del presente análisis, no han contemplado las normas nacionales e internacionales referentes a la protección de Derechos Humanos que el Estado peruano está obligado a cumplir. En consecuencia, la castración química como sanción complementaria resulta violatoria de los derechos humanos, y, por tanto, inconvencional en un sistema democrático de Derecho.

VI. CONCLUSIÓN

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, de conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la **NO APROBACIÓN** de los Proyectos de Ley 1767/2021-CR y 1761/2021-PE y su envío al archivo.

Dese cuenta
Sala de Comisión
Lima, 15 de febrero de 2023

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: JUAREZ GALLEGOS Carmen Patricia FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/02/2023 09:58:24-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: GONZA CASTILLO Américo FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21/02/2023 10:26:58-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: PAREDES GONZALES Alex Antonio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21/02/2023 11:21:46-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CHAVEZ CHINO Betssy Betzabet FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21/02/2023 18:30:55-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CRUZ MAMANI Flavio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22/02/2023 10:47:55-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MORANTE FIGARI Jorge Alberto FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22/02/2023 15:38:22-0500

CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, 24 **de** Marzo **de** 2023

Con acuerdo del Consejo Directivo,
pasó al archivo.—

.....
HUGO F. ROVIRA ZAGAL
Director General Parlamentario
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 1767/2021-CR y 1761/2021-PE, QUE PROPONEN LA CASTRACIÓN QUÍMICA COMO PENA COMPLEMENTARIA EN LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL PARA FORTALECER SU PREVENCIÓN Y SANCIÓN

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ECHAIZ DE NUÑEZ IZAGA Gladys Margot FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/02/2023 12:44:20-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: SALHUANA CAVIDES Eduardo FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/02/2023 10:47:51-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: DOROTEO CARBAJO Raul Felipe FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28/02/2023 17:52:49-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CHIRINOS VENEGAS Patricia Rosa FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28/02/2023 18:42:22-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: TUDELA GUTIERREZ Adriana Josefina FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28/02/2023 11:33:12-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MUÑANTE BARRIOS Alejandro FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/02/2023 12:20:33-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: LUQUE IBARRA Ruth FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/03/2023 13:45:34-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: BALCAZAR ZELADA Jose Maria FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28/02/2023 15:24:06-0500

mp.interno@congreso.gob.pe

De: mesadepartesvirtual@congreso.gob.pe
Enviado el: viernes, 3 de marzo de 2023 14:18
Para: syahuana@congreso.gob.pe
Asunto: Mensaje Usuario Interno - Dictamenes
Datos adjuntos: a488899773a5f7eb8847e178a63b5ef2.pdf

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

[Solicitante]: syahuana@congreso.gob.pe
[Asunto]: Mensaje Usuario Interno - Dictamenes
[Mensaje]: EN LA DECIMA QUINTA SESION ORDINARIA DEL 15 DE FEBRERO DE 2023, SE ACORDO LA DISPENSA DEL TRAMITE DE LECTURA Y APROBACION DEL ACTA PARA EJECUTAR LO ACORDADO. DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 1767/2021-CR y 1761/2021-PE, QUE PROPONEN LA CASTRACIÓN QUÍMICA COMO PENA COMPLEMENTARIA EN LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL PARA FORTALECER SU PREVENCIÓN Y SANCIÓN.
[Fecha]: 2023-03-03 14:17:30
[IP]: 192.168.10.219

Su mensaje ha sido recibido.
Por favor, **NO responda a este mensaje**, es un envío automático de una cuenta no supervisada.